

El proyecto de Cambiemos, entre la economía y la política

Emiliano López

Introducción

Luego de la crisis del modo de desarrollo neoliberal de los noventa, hemos asistido a la emergencia de otro modelo con fuerte puntos de ruptura, tanto en lo económico como en lo político. Al compás de la ola de revoluciones y gobiernos progresistas de la región latinoamericana en la primera década del siglo XXI, el modo de desarrollo argentino tuvo una orientación antineoliberal, desarrollista y, de manera creciente, en clave nacional-popular. Esto involucró aspectos que se vinculan al modelo económico y también aquellas dimensiones propias del plano político: la construcción de la identidad kirchnerista, el debate sobre la politización de un sector de la juventud, la recuperación del rol estatal en la construcción de sentido, entre otras cuestiones.

Este modo de desarrollo que emergió en 2002 y se consolidó hacia 2011, atravesando tensiones y disonancias entre la dinámica de la acumulación y la de la hegemonía política, cambió significativamente desde el año 2008 con el denominado “conflicto del campo”. Desde ese momento y hasta 2011, cuando Cristina Fernández fue reelegida con un amplio margen como presidenta, el kirchnerismo —una nueva identidad política— logró capitalizar las tensiones para reforzar su

proyecto hegemónico. Sin embargo, el 2008 significó un parteaguas en cuanto al vínculo de las clases dominantes con el proyecto kirchnerista. Al principio de manera errática, luego con mayores grados de acierto, los sectores más importantes del gran capital tomaron la delantera para instalar su interpretación de una coyuntura, sobre todo *a posteriori* de 2011, momento en que comenzaban a acentuarse las tensiones económicas, a pesar de la consolidación política de ese espacio. Estos actores de clase lograron así ir más allá de sus demandas corporativas —que implicaban por lo general reclamos clásicos del empresariado en Argentina— al articular un discurso de pretensiones universales.

Las diferentes reconfiguraciones de la oposición partidaria finalmente lograron constituir la alianza Cambiemos, que con su traducción política de las demandas empresariales resultó victoriosa en las elecciones de 2015. Así, ese año marcó un punto de inflexión sin precedentes en la historia argentina: una alianza hegemonizada por un nuevo partido de derecha que logró acceder al poder político del Estado a través de elecciones libres.

Los datos de la economía argentina en 2015 no mostraban una crisis de la forma y la profundidad que este bloque dominante y sus representantes político-partidarios lograron instalar en la agenda pública. Más bien fue una transición relativamente suave hacia un estancamiento económico sin caídas profundas de la producción y del empleo, sin una aceleración desmedida de la inflación, sin elevados porcentajes de deuda pública sobre el producto, ni otros problemas que han sido típicos en las crisis de nuestra historia. A pesar de ello, desde 2012 emergieron una serie de tensiones sobre el modelo económico del kirchnerismo que se expresaban en el plano distributivo, en el estancamiento de la producción industrial, en la sustitución limitada de importaciones y en la incapacidad de superar la restricción externa. Estas tensiones, sumadas a los elementos políticos y culturales, permitieron que incluso sectores empresarios que resultaron gananciosos en

los años de los gobiernos kirchneristas, hicieran propias las banderas del gran empresariado. Se convencieron de que sus demandas eran las mismas y de que los nuevos vientos neoliberales eran una necesidad. En esta situación estructural, la ofensiva neoliberal tomó cuerpo en un modelo económico concreto, que intenta llevar adelante estas demandas y resolver de manera duradera la correlación de fuerzas sociales a favor de las clases dominantes.

Por ello, el gobierno de Cambiemos después de cuatro años no aparecía como “el gobierno de los CEO’s que tenían por objetivo saquear el país, sino que fue un proyecto político-económico que pretendía hacer de nuestro país uno donde las opciones político-partidarias no alteraran el orden económico neoliberal.

Por lo dicho, en el capítulo nos planteamos articular dos dimensiones del proyecto de Cambiemos: la económica y la política. No realizamos un análisis exhaustivo de estas dimensiones, sino que nos centramos en la implementación y el desarrollo de un programa neoliberal de gobierno que articula las demandas del gran empresariado. En el plano económico, analizamos de qué manera el gobierno de Cambiemos produjo resultados que reforzaron las tensiones a las que estaba sujeta la economía argentina en 2015 y, al mismo tiempo, provocaron nuevos problemas macroeconómicos y una situación de crisis que se acentuó sobre todo desde el año 2018. En cuanto al plano político, intentamos dar cuenta aquí de las relaciones entre el programa de Cambiemos y las demandas del bloque en el poder.

Tendencias globales y tensiones domésticas

Desde la década del setenta, los ciclos que han caracterizado a las economías capitalistas se han intensificado. La volatilidad de estos ciclos se profundizó sustancialmente a partir de los procesos de deslocalización productiva, financiarización del conjunto de la economía, la flexibilización de los procesos productivos y del trabajo y las rup-

turas de los controles comerciales y financieros que las economías nacionales mantenían durante los años del capitalismo embrizado (Harvey, 2007).

Sin embargo, si bien podemos situar ese giro neoliberal en la década del setenta, lo cierto es que cada nueva fase descendente del ciclo económico profundizó la tendencia a la inestabilidad y acentuó las formas de subordinación de las periferias a los centros. Cada una de las nuevas crisis que presentaron los centros del capitalismo global desde el *Shock Volcker*¹ hasta hoy, no han hecho más que involucionar hacia mayores niveles de concentración, de financiarización, mayor deslocalización productiva y más presión sobre las clases trabajadoras para soportar estos movimientos críticos.

La crisis de 2008 marcó una nueva etapa de financiarización de las economías del centro, con sus consecuencias para las economías dependientes. La explosión de las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos y Europa (la crisis *subprime*) tuvo como resultado la acentuación de las premisas neoliberales más que una tendencia hacia la conformación de un nuevo consenso con mayor participación estatal en la economía. Esta tendencia se expresó en al menos cuatro variables claves: la apreciación del dólar y la suba de las tasas de interés; el cambio en la dirección de los flujos de capital y comerciales desde la periferia hacia los centros; la concentración y financiarización acelerada; y la profundización de las burbujas especulativas en los precios de las *commodities*.

El camino de la apreciación del dólar fue dificultoso debido a la necesidad de inyección de liquidez y a los salvatajes a varios bancos de inversión e incluso empresas productivas de larga trayectoria, como General Motors. Sin embargo, una vez superada la situación inicial de

¹ Se denomina *Shock Volcker* al aumento de la tasa de interés de más de 10 puntos porcentuales en 1979 como parte de la estrategia del líder de la Reserva Federal, Paul Volcker, que impulsó una política monetarista extrema al frente de la institución.

crisis de liquidez, la Reserva Federal de Estados Unidos se decidió por una política de fortalecimiento del dólar a través del incremento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro, recuperando parcialmente el protagonismo perdido tras más de una década en la cual los llamados “mercados emergentes” (en la jerga de Wall Street y el Fondo Monetario Internacional) habían logrado atraer capitales globales. Es evidente aquí el rol central de Asia oriental —tal como lo destaca buena parte de los trabajos sobre el traslado del centro hegemónico de la acumulación global hacia esa región en desmedro de Estados Unidos— y, por tanto, la respuesta de apreciación del dólar y la tendencia al incremento de las tasas de la FED son un intento de contraofensiva del imperio debido a su decadencia económica (Watkins, 2019).

De esta manera, más allá de las posibilidades de éxito a largo plazo de la estrategia de Estados Unidos, en este momento se intensificó la retracción de los flujos de capitales desde los países periféricos hacia el centro. Este es el segundo punto que mencionamos: estos flujos de capital en el período de la primera década larga del siglo XXI tuvieron una clara dirección desde el centro hacia la periferia, y precisamente luego de la crisis de 2008 la tendencia se revirtió, lo cual no hizo más que profundizar los montos de fuga de capitales en los países periféricos, proceso que asumió especial intensidad en América Latina, con lógicas variaciones entre países.

En tercer lugar, como ha ocurrido en cada proceso de crisis, se fue intensificando la concentración, con particular énfasis en el comando general de la acumulación que va de la mano de la extrema financiarización de la economía global (Duménil y Lévy, 2015). La tendencia general en los centros del capitalismo global desde el giro neoliberal hasta nuestros días ha sido que cada vez más las finanzas han ocupado el centro de la escena en la valorización del capital global y esto atañe tanto al capital estrictamente financiero como al capital productivo (Krippner, 2005). En este sentido es evidente que todas las regiones

del mundo muestran niveles de financiarización muy elevados y esto se correlaciona con una alta concentración del capital.

Sin embargo, no en todos los países del mundo estos procesos tienen los mismos efectos. En América Latina tuvo lugar una financiarización subordinada que se expresó en ciclos de endeudamiento público y privado en moneda extranjera, en nuevos procesos de control productivo desde el centro con menores costos de movilidad del capital, en nuevos ciclos de especulación con las monedas nacionales y, sobre todo, en la apertura a los permanentes flujos de entrada y salida de capitales sin restricciones, que provoca niveles de inestabilidad inéditos en nuestras economías.

Un último elemento para señalar es la creciente volatilidad que han adoptado los precios de materias primas y *commodities*, principales bienes de exportación de los países de América Latina. En el siglo XXI, la hipótesis sobre la tendencia al deterioro de los términos de intercambio que Raúl Prebisch desarrolló para nuestros países se vio fuertemente cuestionada tras casi seis años de incrementos inintermitidos en los principales rubros. Los precios del petróleo, los cereales, alimentos, minerales, entre otros, mostraron aumentos sostenidos y dieron lugar a tasas de crecimiento muy elevadas de las exportaciones, y, por su intermedio, del PBI en la mayor parte de los países ubicados al sur del Río Bravo. No obstante, luego de la crisis de 2008 los precios de las *commodities* se desmoronaron, invirtiendo la balanza comercial de los países de la región. Esta tendencia a la baja se mantuvo y se ha intensificado en los últimos años. Al menos dos cuestiones resultan insoslayables en relación con estos ciclos de precios: por un lado, la demanda de Asia oriental basada en un fuerte consumo de bienes primarios ha tensionado estos precios: al alza en los primeros años del siglo XXI, con China e India creciendo a más del 10% anual, y a la baja luego de la desaceleración de este crecimiento; por otro lado, el proceso de financiarización no se limitó al sector inmobiliario sino que

tuvo niveles similares de intensidad en el mercado de bienes primarios y alimentos. Si bien el proceso de financiarización de estos bienes no es novedad, pues comenzó en la Bolsa de Chicago con la crisis del orden fordista, la aceleración de los últimos 20 años de la intromisión de las finanzas en la producción primaria a través de los mercados de futuros, derivados, *securities*, entre otros, nos da una idea más precisa de cómo la tendencia al alza y baja de los precios de estos bienes responde en una mayor proporción a los caprichos de la especulación bursátil.

Así, la tendencia a la apreciación del dólar, la reversión de los flujos internacionales de capitales, la aceleración de la financiarización y la concentración asociada, como también la caída de los precios internacionales de bienes primarios, dan cuenta de un mundo diferente al que existió durante los momentos de auge de los gobiernos progresistas en nuestra región. Por ello, las tensiones entre las principales potencias globales en pos de imponer su proyecto hegemónico tienen consecuencias directas para nuestras economías dependientes. Lo que vemos en la región desde 2015 en adelante es una nueva apuesta del gran capital financiero estadounidense para posicionarse en el marco de esta tensión por la hegemonía. Luego de una década larga de pérdida de peso relativo, el capital estadounidense, de la mano del FMI, intenta recuperar su rol de articulador de las demandas del capital financiero internacional en nuestros países.

Sin embargo, este marco global no permite explicar por completo el cambio de época latinoamericano. Debemos buscar una parte nada despreciable de esta explicación en las particulares tensiones económicas internas a las que estuvieron sujetos los proyectos de desarrollo nacionales.

Entre las tensiones estructurales y la política económica neoliberal

El cambio de escenario internacional impactó sin duda en el modo de desarrollo de nuestro país. Las tensiones económicas se empe-

zaron a sentir desde el conflicto agrario, sin embargo, fue luego de 2012 cuando estas, acumuladas, se expresaron como una desmejora creciente de los principales indicadores económicos (López, 2015). Más allá de esto, como mencionamos, la situación no representaba una crisis económica profunda sino en todo caso las tensiones propias de nuestro país en cuanto economía dependiente (y por ello estructurales) que no habían sido resueltas durante el ciclo de los gobiernos del kirchnerismo (Schorr, 2018).

Aquí proponemos una jerarquización de esas tensiones, para abordar en cada una de ellas cuáles fueron las principales políticas implementadas por Cambiemos luego de 2015 y por qué el resultado es la actual crisis en la que está sumergido nuestro país.

La restricción externa y la “solución” de Cambiemos: devaluación, endeudamiento y liberalización de la inversión extranjera

La primera tensión que aparece como evidente durante el último tramo del mandato de Cristina Fernández es el notorio deterioro de la balanza de pagos. La salida devaluatoria de 2002 y el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo y estable para lograr saldos exportables significativos no solo en el sector de bienes primarios sino también en algunos sectores industriales (especialmente los vinculados a la producción de alimentos), mostró sus límites como estrategia de crecimiento sostenido luego de 2012. El último año de aumento de las exportaciones fue 2011; luego, entre 2012 y 2015, las caídas se fueron haciendo más pronunciadas hasta alcanzar, en cantidades, una baja de 15%. Es precisamente en esos años cuando la cuenta corriente comienza a arrojar resultados negativos, debido en parte a esta caída del ingreso de dólares por el canal comercial —que fue, sin duda, la vía de ingreso de divisas más importante durante la vigencia del modelo de acumulación de los gobiernos kirchneristas—. A ello habría

que adicionar la creciente demanda de importaciones en el marco de la denominada crisis energética.

Por supuesto, la discusión es si puede atribuirse el deterioro de la balanza de pagos exclusivamente a la situación de crisis internacional que antes señalamos, o bien a las características estructurales de nuestra economía. Aquí consideramos que ambas dimensiones son necesarias: por un lado, estructuralmente nuestro país continuó siendo sobre todo un exportador neto de bienes primarios y productos manufacturados de bajo valor agregado; por otro lado, la caída de los precios internacionales de las *commodities* y la reversión creciente de los flujos de capitales provocaron una caída directa de los montos de exportación a la vez que una retracción de dinero por las cuentas financieras, que han sido muy significativos luego de 2012.

En esta situación estructural y coyuntural adversa, cabe preguntarnos cuál fue la política adoptada por el gobierno de Cambiemos. Fiel a las premisas neoliberales, el gobierno, haciéndose eco de las demandas del gran empresariado, llevó adelante una serie de políticas para “volver al mundo”. En términos concretos, esto significaba una nueva estrategia exportadora, por un lado, y la reinsertión en los mercados financieros internacionales, por otro. Este esquema de liberalización, a contramano de la economía mundial, depositó las expectativas del gobierno y del gran empresariado en la atracción de inversiones. En los primeros años de la gestión de Cambiemos, los montos exportables se mantuvieron en niveles similares a los de 2015, a pesar de la fuerte devaluación del peso dispuesta inmediatamente después de asumir. Por otra parte, el ingreso esperado de capitales mostró un desarrollo más bien de “bicicleta financiera” que de ciclo virtuoso de inversiones.

El “retorno al mundo” profundizó el déficit de cuenta corriente del país a través de tres canales. El primero de ellos fue el canal comercial: en 2017 y 2018 las importaciones superaron a las exportaciones en 8 mil millones y 3 mil millones de USD, respectivamente. La de-

valuación del peso y la quita de retenciones no movieron un ápice las cantidades exportadas en un marco de precios internacionales bajos y una demanda moderada desde Asia oriental y Brasil. La liberalización comercial permitió además incrementar las importaciones de bienes que compiten fuertemente con la industria local, lo cual provoca efectos redistributivos entre los diferentes sectores del capital doméstico.

El segundo fue el canal financiero privado. El monto neto de inversión extranjera directa (IED) —es decir, los ingresos de capital menos la remisión de utilidades— representó en 2016-2018 un valor de 278 millones de USD anuales, frente a 1.150 millones en 2013-2015. Esto fue producto de que la mayor parte de los ingresos de capitales tuvo como destino inversiones de cartera de corto plazo, aprovechando los incrementos sin igual de las tasas de interés de los instrumentos financieros locales, principalmente las letras emitidas por el Banco Central (Lebacs, luego convertidas en Leliqs). Mientras que durante los gobiernos kirchneristas los dólares necesarios para sostener el crecimiento del producto, dada la dinámica dependiente de nuestra economía, fueron obtenidos mayormente a través de una balanza comercial positiva, en los años de Cambiemos no solo la balanza comercial alcanzó niveles de déficit históricos, sino que la liberalización financiera dio lugar a una “bicicleta” inédita, únicamente comparable con la de los años de la dictadura cívico militar. El ingreso de dólares especulativos sumado al desmantelamiento de los controles a la salida de capitales, incrementó la fuga durante los últimos meses de 2017 y ya desde 2018 el reflujo de capital hacia el centro cumplió un rol clave en el empeoramiento de la cuentas externas y, al mismo tiempo, en acumular presiones sobre el tipo de cambio que llevaron a devaluaciones sucesivas, lo que agudizó sobremanera el sesgo regresivo del programa económico.

El tercer canal es el del endeudamiento público. En los casi cuatro años de mandato de Cambiemos, el crecimiento de la deuda pública nominada en moneda extranjera no cesó de aumentar, sobre todo a

partir del cierre de los mercados de capitales y la reversión completa del flujo de capitales de la periferia hacia el centro, en el cual la política de Estados Unidos dentro del marco de la guerra comercial se tornó clave. En todo el período el endeudamiento externo de Argentina aumentó un 50%, llegando a representar alrededor del 90% del PBI. Este endeudamiento comenzó con privados a través de colocaciones en mercados financieros, y continuó con un paso definitivo hacia la crisis luego de que los bonos argentinos se tornaron poco apetecibles para los grandes fondos de inversión. Ello desembocó en una crisis cambiaria de gran magnitud y en el retorno de un endeudamiento condicionado a un programa de ajuste y austeridad comandado por el Fondo Monetario Internacional. El FMI otorgó un crédito *stand by*, con monitoreo permanente de la política macroeconómica del gobierno, por más de 50 mil millones de USD. A pesar de los discursos del gobierno, más que hacer retornar la calma por los nuevos dólares que iban a ingresar para dar respaldo a la moneda nacional, esto favoreció aún mayor especulación por parte de los capitales financieros sobre el tipo de cambio, dado el compromiso del gobierno con la flotación cambiaria y la existencia física de dólares frescos. Estos dos elementos conjugados hicieron del *carry trade* sobre la moneda nacional, un negocio excelente para los especuladores, que solo logró estabilizarse en mayo de 2019 a partir de la intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump en las negociaciones para habilitar la utilización de fondos prestados por el FMI con el fin de intervenir incluso dentro de la banda de flotación acordada.

De la sustitución de importaciones limitada y el desplome del sector industrial a las superganancias de las finanzas y los servicios

Durante el período 2012-2015 se hizo presente otra de las tensiones estructurales que históricamente han condicionado a nuestro país:

su estructura productiva desequilibrada. Esto implica que los sectores primarios o directamente asociados son los que logran altos niveles de competitividad y rentabilidad. En buena medida, luego de la devaluación de 2002, el cambio de precios relativos entre los sectores productivos y los sectores financieros y de servicios, permitió un crecimiento significativo por varios años de los primeros (es decir, del capital productivo). Dentro de estos sectores productivos, sin embargo, los agropecuarios y mineros fueron los que mantuvieron mayores niveles de rentabilidad internacional, mientras que la industria sostuvo durante varios años (al menos hasta 2008) elevados niveles de rentabilidad e incrementos de su participación en el PBI, pero sin alcanzar la hiperrentabilidad del sector agrario y del minero en el marco de coyunturas excepcionales de precios internacionales (López y Barrera Insua, 2018).

En esta situación, es claro que hubo un proceso sustitutivo de importaciones industriales, que la industria mostró dinamismo y que esta dinámica produjo significativos incrementos del nivel de empleo y de mejoras sensibles en las condiciones de los trabajadores para llevar adelante demandas por salarios. Sin embargo, debemos contemplar dos elementos respecto a los límites de este proceso de recuperación industrial.

En primer lugar, la política central para garantizar ciertas posibilidades de crecimiento a la industria fue la combinación de tipo de cambio elevado, retenciones a las exportaciones primarias, subsidios a la energía y negociaciones salariales tripartitas. Este conjunto de políticas macroeconómicas que otorgaron beneficios a ciertas ramas industriales, se vio fuertemente limitado ante los crecientes conflictos distributivos, la apreciación cambiaria y el incremento de la utilización de capacidad instalada. En ese momento, con niveles de utilización de la capacidad cercanos al máximo, incrementos salariales significativos y una situación internacional más desfavorable, la industria comenzó

a profundizar su déficit comercial, a obtener menores niveles de rentabilidad y a tensionar por un proyecto político que impusiera nuevas condiciones para su sector que permitieran reducir costos (sobre todo salariales) y generar nuevas posibilidades exportadoras.

Por otra parte, es importante tener presente que una de las características propias de las economías dependientes es el elevado grado de concentración y extranjerización que se presenta en las ramas que definen el perfil de especialización y de participación de los países en la división internacional del trabajo. Argentina no es la excepción. Desde los años noventa, la pequeña y mediana industria que genera la mayor parte de los empleos y abastece al mercado doméstico se ve por lo general subordinada a las condiciones que impone el gran capital (mayormente extranjero).

La situación a mediados de 2015 era de un cierto estancamiento en el crecimiento industrial, dado por una lógica que algunos autores han llamado “reticencia inversora” del gran capital (Schorr, Cassini y García Zanoti, 2019), en un contexto de elevada utilización de la capacidad instalada y de una tensión distributiva creciente, sumadas al ya mencionado problema de balanza comercial. En este marco, las políticas implementadas por el nuevo gobierno no hicieron más que provocar una fabulosa redistribución de ingresos desde los trabajadores y trabajadoras hacia el gran capital, y desde las ramas productivas a las financieras y de servicios; cambio de ganadores, un claro perdedor y acelerado proceso recesivo que tuvo su principal impacto en el sector fuerza de trabajo intensivo: la industria pequeña y mediana.

El paso inicial estuvo dado por la devaluación del peso de más de un 30% al momento de asumir el gobierno de Cambiemos, adicionando un recorte de retenciones en algunos cultivos. Si bien logró un pequeño rebote en el sector agropecuario, dados los precios internacionales vigentes, el mismo no logró abastecer de divisas al sector industrial. Como se dijo, la liberalización comercial agravó las

posiciones de competitividad de los capitales industriales domésticos y de las economías regionales, que redujeron su producción de manera significativa. La dolarización de los precios de la energía y los servicios públicos provocó, en lugar de una reducción, un incremento sin precedentes de los costos industriales (aumentos mayores al 1.500% entre 2016 y 2018). Como si esto fuera poco, la depresión del mercado interno dinamitó las chances de una rehabilitación de las economías regionales y del mercado interno para la producción industrial. Por último, el aumento de las tasas de interés implicó una limitación completa al crédito y, en el mismo movimiento, modificó sustancialmente las rentabilidades relativas en favor del capital financiero y de las inversiones de cartera.

La nueva ofensiva neoliberal estuvo basada en un avance sobre el capital productivo para reorganizar la dinámica de acumulación de Argentina a los nuevos senderos de la financiarización global. Pero aun cuando la caída de los salarios reales, la flexibilización del trabajo y el desempleo fueron un objetivo explícito desde que asumió el gobierno en diciembre de 2015, los niveles de ajuste y redistribución no llegaron a ser de tal magnitud como para que la economía repunte en un sendero de crecimiento *à la* Chile, Perú o México, es decir, un crecimiento desigualador.

La puesta en práctica de la ideología monetarista

Durante los años posteriores a 2008, la inflación comenzó a acelerarse de manera significativa. De tasas de inflación de alrededor del 10% durante el primer gobierno kirchnerista, los precios escalaron luego entre el 20% y el 30% anual. Estos aumentos de precios tienen, a nuestro entender, dos componentes: uno interno y otro externo. En cuanto al primero, la estructura económica y social de nuestro país, el poder de las organizaciones sindicales y el alto nivel de concentración del capital en cada rama de la producción son las dimensiones

centrales a tener en cuenta en el análisis de los aumentos de precios. Con el componente externo nos referimos a la inflación importada (la inflación externa), asociada en buena medida al papel que ha jugado nuestro país en el concierto del capital global como productor de materias primas y alimentos, que permite que exista una relación directa entre precios internacionales de alimentos y precios domésticos. Por supuesto que el tipo de cambio alto y las devaluaciones sucesivas tienen un doble impacto sobre los precios internos: por un lado, vía incrementos directos de los precios de los transables, y por otro lado, aumento de costos de los componentes importados de los bienes que se comercializan internamente.

El componente doméstico de la inflación en los años kirchneristas respondió a la relación entre concentración económica, conflicto distributivo y baja tasa de inversión. Frente al aumento de la utilización de la capacidad instalada industrial entre los años 2003 y 2008, las demandas por incrementos salariales tomaron fuerza y permitieron al movimiento obrero reorganizarse después de la debacle que implicaron los años neoliberales. Desde 2008 en adelante, la estrategia para incrementar las ganancias empresariales por parte de los grandes capitales estuvo mayormente centrada en los incrementos sostenidos de los precios, evitando así aumentar sus ganancias a través de la inversión en capital fijo y tecnología, lo cual conlleva una utilización productiva del excedente económico.

A partir de la consolidación de Cambiemos como fuerza político-electoral, y haciéndose eco de las demandas del gran empresariado, se planteó el problema de la inflación en una clave interpretativa completamente ligada al enfoque monetarista: el proceso inflacionario responde a la mala gestión de la política monetaria (la sobreemisión que resultaría de un déficit fiscal anclado en un gasto público “excesivo e ineficiente”) y a una estrategia errónea de financiamiento del gasto público. Esto llevó a Macri, en la campaña electoral de 2015, a realizar

afirmaciones tales como “el problema de la inflación se resuelve en cinco minutos”. La política adoptada desde el comienzo para contener los aumentos de precios fue básicamente un monetarismo ultraortodoxo: reducción de la cantidad de dinero, incremento de la tasa de interés y flotación del tipo de cambio. La restricción monetaria tuvo así un claro efecto contractivo sobre el consumo doméstico, pero su impacto sobre la inflación fue prácticamente nulo. Más aún, los precios no dejaron de aumentar desde la asunción del nuevo gobierno producto de la profundización de las tensiones inflacionarias reales, que no estaban integradas en el diagnóstico ideológico que realizó la dirigencia neoliberal. Por un lado, modificaron de manera significativa los precios relativos a favor de las empresas de servicios públicos y energía, los que impactaron de manera superlativa en los costos industriales, de transporte y de almacenamiento. Por otro lado, la política de flotación cambiaria sugerida por los manuales del FMI no hizo más que multiplicar las presiones inflacionarias externas ante cada corrida especulativa sobre la moneda argentina. Para completar el cuadro, las exorbitantes tasas de interés de referencia —que alcanzaron niveles superiores al 70%—, no hicieron más que tentar al voraz capital financiero para especular con el tipo de cambio (*carry trade*).

De esta manera, la lectura ultramonetarista del gobierno de Cambiemos impuso un velo ideológico sobre el diagnóstico, una mirada por completo errónea sobre las causas de la inflación en Argentina. En cuatro años de gobierno los precios escalaron más del 190%, incluyendo el valor de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 de un 57% que expresó el mayor índice de inflación en 27 años.

La falacia del ajuste fiscal como salida a la crisis

La cuestión fiscal no representó un problema central de los gobiernos kirchneristas. Por el contrario, durante la mayor parte de los años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, las cuentas

públicas presentaron superávit o bien niveles de déficit primario reducidos en términos de PBI. No obstante, existen algunas cuestiones de indiscutible importancia que provocan limitaciones estructurales para la política fiscal. Una de ellas es que el importante porcentaje de trabajadoras y trabajadores precarios e informales (muchos de ellos hoy nucleados en las organizaciones de la economía popular) fue reconocido solamente como un actor necesitado de ayuda social a través del gasto público. Es claro que el capitalismo tardío produce altísimos niveles de precariedad y que el trabajo formal tal cual lo conocimos bajo el modelo fordista está inmerso en una crisis sin igual. Asimismo, está claro que en ese contexto la protección social desde el Estado se torna una necesidad ineludible. Sin embargo, el problema clave es que al ser este fenómeno de heterogeneización del mercado de trabajo una cuestión estructural, la demanda de programas sociales es creciente, y, por tanto, también lo son las necesidades de financiamiento estatal para cubrir estas necesidades. La otra cuestión que surge de aquí es que con una estructura tributaria regresiva, difícilmente se tornen compatibles en el mediano-largo plazo los esquemas de gastos sociales necesarios y las políticas ligadas a la seguridad social. En relación con la problemática fiscal durante el ciclo kirchnerista, cabe destacar que la irrupción de desequilibrios se asoció también con la concurrencia de otros elementos, entre los que se destacan la utilización del gasto público con un criterio contracíclico (sobre todo en tiempos de los gobiernos de Cristina Fernández) y la proliferación de subsidios a distintas actividades económicas (con un rol destacado de diversos rubros abocados a la prestación de servicios públicos).

En ese marco de tensión, la “solución” de Cambiemos fue, desde el principio, pensar en el ajuste del gasto público como estrategia para generar el ahorro necesario (público y privado) que permita un proceso de desarrollo basado en la inversión. Esta estrategia típica de los modelos liberales no solo que nunca ha dado frutos sino que, por

el contrario, provocó en la mayoría de los casos un círculo de déficit-ajuste-recesión-déficit. Esto no es novedad y ha sido una de las principales discusiones que los economistas keynesianos les han planteado a los neoliberales frente a las sucesivas crisis del capitalismo central. Sin embargo, el gobierno comenzó con un ajuste del gasto que llamó “gradualista”, a la vez que quitó algunos de los impuestos más progresivos del esquema tributario anterior a 2016 (parte importante de las retenciones a las exportaciones primarias). En esta situación, el Estado perdió un ingreso de alrededor de nueve mil millones de pesos anuales e intentó por todos los medios reducir los gastos en tres rubros: infraestructura, salarios estatales de planta y subsidios a las empresas de servicios. Mientras llevaba adelante este ajuste, incrementó fuertemente el gasto en la estructura jerárquica del Estado, al mismo tiempo que la multiplicación de los pagos de deuda a corto plazo provocó una necesidad de financiamiento significativa de lo que se llama déficit cuasifiscal. A fines de 2017 el ajuste de gastos incluyó las jubilaciones y pensiones, que a pesar de la fuerte oposición de sectores movilizados, logró pasar como una ley por ambas cámaras del Congreso y fue promulgada inmediatamente. Esta Ley de Reforma Previsional permitió un “ahorro de jubilaciones” de 100 mil millones de pesos en 2018.

Ese mismo año, frente a la intensificación del cambio global, la firma del acuerdo con el FMI aceleró la marcha del ajuste. Los gastos sociales comenzaron a tener recortes profundos, los salarios estatales cayeron entre 16% y 35% en términos reales dependiendo del sector, las jubilaciones perdieron frente a la inflación mes a mes. La contracara esperada por el gobierno nunca llegó. La reducción del gasto y de la inversión pública no generó un efecto positivo sobre la inversión privada. Muy por el contrario, contrajo aún más la demanda de consumo popular y, como es de esperar en un mundo en el cual la salida exportadora no es una opción para nuestros países, esto redundó en caídas sostenidas de la inversión. Por ambos canales se retroalimenta

la recesión. Así, la estrategia de “déficit cero” llevada adelante por el gobierno desde junio de 2018 produce y reproduce la recesión y acentúa el déficit fiscal dada la prociclicidad de los impuestos en nuestro país.

Puede afirmarse entonces que con el gobierno de Macri se consumó una alteración ostensible en el *carácter* del déficit fiscal respecto de los años kirchneristas, en la medida en que los desequilibrios se explican centralmente por dos grandes transferencias de ingresos desde el Estado hacia ciertas fracciones del poder económico (grandes exportadores y capital financiero). La “solución” a esta problemática pasó por un drástico recorte de gastos en sueldos en la administración pública, en infraestructura, etc., y en el despliegue de un “festival de bonos” que hizo crecer de manera exponencial el negocio financiero para pocos. Así, la presunta austeridad antipopulista no es más que una política macroeconómica clasista en todo su esplendor.

Las demandas del empresariado como explicación del cambio de modelo económico

Una cuestión interesante para reflexionar es en qué medida y hasta qué punto el programa de gobierno es una decisión autónoma de la fuerza política en el poder o bien es una respuesta desde el aparato del Estado a las demandas de una clase o grupo social particular. Según nuestra perspectiva, el programa de política económica de la alianza Cambiemos intentó responder a las demandas del gran empresariado durante el período 2012-2015.

En el momento en que las tensiones económicas del “modelo” kirchnerista tendieron a acentuarse, el empresariado que lleva adelante sus actividades en Argentina, representado en las principales asociaciones del país (Asociación Empresaria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina —IDEA—, parte de la Unión Industrial Argentina, entre otras), comenzó a instalar en la agenda pública una serie de demandas que fueron

consolidando la base para un programa de oposición al kirchnerismo, con clara orientación neoliberal. Ya por esos años, las diversas organizaciones empresariales volvieron a tomar la iniciativa con una crítica mordaz a la política del gobierno. Esto les permitió aparecer como un actor clave en la articulación de las iniciativas liberales, más allá de sus demandas corporativas, de cara a los procesos electorales de 2013 y 2015. En buena medida, después del año 2011, las principales entidades empresariales avanzaron en pos de la consolidación de una alternativa política al kirchnerismo. Si bien la explicación del desgaste del orden social kirchnerista posee múltiples dimensiones, queremos hacer foco aquí en un aspecto clave que se vincula con las cuestiones económicas que presentamos en el apartado anterior, esto es, el desplazamiento de los nodos discursivos del empresariado hacia posiciones neoliberales o conservadoras.

Si tomamos como unidad de observación la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y el Coloquio de IDEA, tres de los espacios conformados por el gran empresariado, sus demandas se pueden sintetizar en una tríada de puntos clave: la integración al mundo, la cuestión energética y la reducción de costos.

Sobre el primer punto, las demandas corporativas de estos actores se vincularon a la solución del conflicto con los fondos “buitres” para lograr nuevo acceso al crédito internacional, a un incremento del tipo de cambio para volverlo competitivo y a una resolución definitiva de las regulaciones sobre el comercio exterior.² En términos de políticas públicas, este lema se expresó en la inmediata reunificación del tipo

² Entre las demandas con las que se presentó en sociedad el Foro de Convergencia Empresarial (FCE), figura como punto (g) la “integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales”; e “(i) eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones”.

de cambio, quitando restricciones a la adquisición de divisas, los controles ligados al comercio exterior y la reducción de los derechos a las exportaciones (a cero para maíz, carne y trigo). También se decidió en el primer mes de gobierno un cambio en la forma de la deuda pública, al transformar 5 mil millones de USD en letras intransferibles en poder del Banco Central en títulos negociables en el mercado secundario, que fueron oportunamente colocados en manos de los bancos JP Morgan, Citibank,³ Deutsche, HSBC y Goldman Sachs. Este sería el puntapié inicial del nuevo esquema de políticas económicas que ponían la toma de deuda en el centro gravitatorio de la política macroeconómica.

En segundo lugar, desde la presentación pública del Foro de Convergencia Empresarial se señaló al problema energético como un eje de peso. En el documento liminar del FCE se pedía una serie de cambios significativos en este punto.⁴ El mercado energético era presentado como el caso paradigmático de los efectos de la intervención del Estado, que, al provocar una distorsión de precios, generaba insuficiencias en la inversión, y por ello, en la producción e incluso de divisas, dado que se compensaba la demanda mediante importaciones. Nuevamente, el gobierno de Cambiemos tomó esta demanda como uno de los puntos nodales de su esquema de políticas económicas, y declaró la emergencia energética (Decreto N° 134/15) en diciembre de 2015.

El interés del empresariado en estas oportunidades de inversión valió incluso la organización de un evento por parte de AEA en noviembre de 2016, llamado “La energía como motor para el crecimiento”, en el que participaron los ministros Juan José Aranguren y Francisco

³ El primer banco fue el espacio donde se desarrolló laboralmente por años el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, mientras que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, venía del segundo de los bancos señalados.

⁴ Nótese que la demanda por el problema de abaratar la logística estaba presente en este listado. Lo trabajamos aquí en el siguiente inciso.

Cabrera, así como el jefe de Gabinete Marcos Peña. Allí insistieron sobre la necesidad de sostener el horizonte de precios trazado, y además pusieron sobre la mesa el alto costo de los trabajadores petroleros.⁵

Las expresiones de apoyo al reacomodamiento de precios fueron sistemáticas. La interpretación propuesta resulta interesante, pues se postula al gobierno como celador de los intereses de largo plazo de toda la sociedad, que serían ajenos a la voluntad presente del propio pueblo. Así, el ajuste mejoraría la vida de la sociedad entera al impedir una crisis mayor: tanto por reducir el déficit fiscal como por evitar una recesión por falta de un insumo clave (la energía).⁶

En tercer lugar, la demanda por la reducción de costos laborales, logísticos, de infraestructura y fiscales fue de gran importancia para el empresariado. AEA organizó una jornada completa para discutir sobre los costos de la logística, llamada “Infraestructura del transporte y costos logísticos: los desafíos de crecer”, que contó con la presencia del ministro Dietrich. Evaluando el tipo de cambio estable, sus demandas se centraron en reducir trámites, ampliar la red ferroviaria, disminuir el costo laboral, eximir de IVA al transporte de cargas o subsidiar combustibles.⁷ Por su parte, el debate sobre los costos laborales se mantuvo en el primer plano de los reclamos empresariales hasta fines de 2017. Aun con el regresivo programa de política económica, el aumento del desempleo y la caída sostenida del salario, los costos no se redujeron a los niveles deseables para los grandes empresarios. La intención del gobierno de Cambiemos fue claramente asociar la falta de avance de las reformas laborales a “las mafias sindicales”, “la industria del juicio laboral” y otras formas de desprestigio de la organización sindical (Reartes y Pérez, 2018). Los despidos, la caída

⁵ Véase *Ámbito Financiero* (2 de febrero de 2017).

⁶ Véase Franco (9 de abril de 2017).

⁷ Véase Cayón (20 de abril de 2017) y *El Cronista* (20 de abril de 2017).

del salario y la propia crisis funcionaban como una amenaza, que mejoraba las condiciones para que el empresariado pudiera presionar por cláusulas de flexibilización en las negociaciones colectivas. La cantidad de convenios colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo cayó abruptamente, a niveles inferiores a los de una década atrás.

Si bien las cámaras entendían la necesidad de avanzar de manera gradual con esta flexibilización, la aprobación de una reforma laboral en Brasil en julio de 2017 aceleró los tiempos.⁸ En esa dirección, el gobierno y la cúpula empresarial comenzaron a hablar de las demandas por juicios laborales como un sistema criminal, que excedía la protección de quienes trabajan convirtiendo a la normativa en un mecanismo de presión. Esta línea de discurso se enfatizaría luego de que Cambiemos saliera fortalecido de las elecciones legislativas de octubre, momento a partir del cual el presidente Macri indicó que se entraba en una fase de “reformismo permanente” (sic), consistente en impulsar las reformas que se venían prometiendo: laboral, tributaria, previsional. Luis Etchevehere, entonces presidente de SRA y luego ministro de Agroindustria, señaló el carácter “fundacional” del discurso de Macri. Ya varias organizaciones habían expresado públicamente su beneplácito con el resultado favorable al gobierno en las PASO de agosto.⁹

Vale señalar que el tratamiento de estas reformas fue muy costoso en términos políticos para el gobierno, que tras ganar las elecciones, vio desplomarse su imagen en la opinión pública. Sin embargo, al recurrir al FMI en 2018, en medio de las corridas cambiarias, se volvería a poner en el tapete la necesidad de ir por reformas más profundas, incluso en los mismos ejes ya señalados: laboral, previsional e impositivo. Con la llegada del FMI, se agotó el tiempo para el gradualismo.

⁸ Véase Donato (24 de julio de 2017).

⁹ Véase Donato (14 de agosto de 2017).

Como hemos visto en cada uno de estos puntos, las demandas corporativas del empresariado que conduce los procesos de acumulación de capital en la Argentina tuvieron un correlato casi directo en la política económica de Cambiemos. Más allá de esto, la acentuación de la crisis desde fines de 2017 y principios de 2018 comenzó a provocar el desgaste del bloque de poder, que incluía a la mayor parte del empresariado y a la fuerza política en el gobierno. Las grandes prerrogativas de las fracciones de las clases dominantes ligadas a los servicios públicos y a la cadena energética palidieron ante las elevadas ganancias de las finanzas.¹⁰

Esta última fracción se erigió como hegemónica dentro del bloque en el poder, pero su propio esquema de políticas parte de una desventaja de origen en nuestro país: padece una debilidad estructural para encabezar esa alianza del empresariado. A las críticas de las cámaras industriales se fueron sumando las de la construcción y el comercio, debido a la parálisis de la actividad. Incluso el sector agropecuario, que era considerado el núcleo central de la oposición a la gestión de Cristina Fernández y, por tanto, parte clave de la coalición de Cambiemos, empezó a plantear críticas al gobierno. Las dudas sobre la continuidad se expresaron de cara a las elecciones primarias de 2019, cuando tanto el empresariado como el propio FMI comenzaron a evaluar alternativas políticas que sostuvieran el programa, pero garantizando cierta gobernabilidad que Cambiemos parecía estar perdiendo.

Por lo dicho, como expresión de una correlación de fuerzas favorable a los sectores más concentrados del capital, la alianza Cambiemos logró realizar tres cambios sustanciales que mostrarían el nuevo mapa de ganadores y perdedores. Primero, logró modificar la estructura de precios relativos, mejorando la posición de algunos (tasa de interés

¹⁰ Como lo expresa por ejemplo el conflicto con el conglomerado Techint, que invirtió en Vaca Muerta a cuenta de beneficios fiscales que le fueron retirados en 2019, a fin de obtener recursos para el pago de la deuda.

real, tarifas, medicina, alimentos y energía) en contra de otros (el salario en primer lugar). Segundo, modificó el déficit fiscal: operó una redistribución de gastos (los pagos de intereses desplazaron a las transferencias económicas a los servicios públicos) y de ingresos (redujo el aporte de impuestos directos y al comercio exterior y mantuvo los impuestos indirectos). Estas dos modificaciones cambiaron la apropiación del excedente: las finanzas se volvieron las grandes ganadoras, las clases trabajadoras fueron las mayores perdedoras. Tercero, se alteró el financiamiento de las cuentas externas, al darle preeminencia a los dólares “financieros” por sobre los “comerciales”, lo cual otorga mayor poder estructural al capital financiero, beneficiado además por los otros dos cambios referidos. Este nuevo esquema respondió a la ejecución del programa que comentamos a continuación.

Una breve reflexión sobre la pretensión hegemónica de Cambiemos y algunas preguntas finales

Buena parte de las intervenciones discursivas del gran empresario se orientaron a mejorar sus posiciones corporativas mediante el reclamo de políticas públicas. Sin embargo, un eje menos estudiado y quizá de mayor relevancia en el mediano y largo plazo se refiere a las operaciones ideológicas que han llevado adelante en aras de construir sentidos comunes sobre la interpretación de la realidad.

Más allá de las políticas específicas, hubo un eje particularmente relevante para consolidar el bloque social en el poder, al menos hasta mediados de 2018: *el antipopulismo*. Desde las diferentes asociaciones empresariales y el gobierno, se buscó instalar este eje como un elemento refundacional de la Argentina, para dejar de lado “el fracaso de los últimos 70 años”. Parecen reactivar así el mito de un país “normal”, “democrático”, “rico”, entre otras dimensiones, que el populismo no permitió desarrollar. El jefe de gabinete de Cambiemos, Marcos Peña, planteaba con toda claridad este aspecto en una entrevista radial:

“Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal”. Del mismo modo se expresaron voces de los ámbitos empresariales de mayor peso. Tanto AEA como los discursos de una variedad de empresarios que confluyen en los sucesivos Coloquios IDEA desde 2015, desarrollaron esta intervención impugnatoria del orden social anterior. Un ejemplo es el discurso de Gastón Remy, presidente de Dow Argentina, en el marco del 53 Coloquio de IDEA en octubre de 2017, en el cual, luego de mencionar datos económicos y políticos de los últimos 50 años, concluye: “Esos números nos muestran que perdimos el camino y nos descarrilamos como sociedad” (Arbia, 11 de octubre de 2017).

Para notar el vínculo directo entre esta lectura empresarial y la conducción política del Estado, el presidente Mauricio Macri propuso en el mismo Coloquio una frase similar: “El desafío de fondo es el cambio cultural, volver a reafirmar los valores que nos trajeron hasta acá, que trajeron nuestros abuelos, que el trabajo dignifica, que vale la pena esforzarse, valores que el populismo puso en crisis” (Clarín, 13 de octubre de 2017).

Es posible pensar este nodo interdiscursivo articulador de la posición ideológica del bloque en el poder como parte de una estrategia fundacional del orden social, con base en el rechazo del pasado y, al mismo tiempo, como una “promesa de redención”. El populismo aparece, a decir de Adamovsky (2016), como un desplazamiento metonímico que alude a autoritarismo, demagogia, nacionalismo, vulgaridad, crisis. Una formulación discursiva similar se puede encontrar en el significant “pesada herencia”. Sin embargo, la construcción de una hegemonía discursiva requiere trazar una frontera entre esta negatividad del pasado y una positividad futura que construya un consenso en el presente. Es decir, debe darse un desplazamiento discursivo que involucre el pasaje de una estrategia hegemónica en la cual el peso del pasado —pesada herencia, populismo, demagogia,

autoritarismo— permita revalorizar el presente, hacia una polaridad en la que lo potencial —el orden, la estabilidad, el desarrollo— comience a ganar mayor peso para consolidar la estrategia hegemónica en el presente.

Consideramos que en el período 2015-2018 el nodo positivo del trazado de una frontera discursiva por parte del bloque en el poder fue, sin duda, “la república” (Adamovsky, 2016). Esta lógica binaria entre populismo y república fue una constante de la política argentina luego del conflicto del campo en 2008, pero tomó un mayor peso luego de 2012, cuando la acentuación de las tensiones económicas acumuladas y el “giro particularista” profundizado hacia el segundo mandato de Cristina Fernández, colocó a AEA y a la SRA a la cabeza de la construcción de un consenso republicano para el desarrollo del país. Desde esta perspectiva, un proceso de crecimiento económico y social sostenido dependía de manera crucial de este consenso, y excedía por mucho sus demandas sectoriales, mostrando un contenido político-ideológico categórico.¹¹

Aun cuando estas entidades fueron la punta de lanza del discurso republicano entre el empresariado, a fines de 2013 se produjo la diáspora de dirigentes de la UIA hacia diferentes espacios político-partidarios: desde el acercamiento al PRO y la alianza Cambiemos, hasta (los sectores más centristas) al interior del Frente para la Victoria, pasando por el Frente Renovador.

Si bien este mito republicano es la principal argamasa del edificio ideológico del proyecto liberal-conservador en nuestro país, cabe preguntarnos sobre qué otros ejes se ha venido articulando una estrategia discursiva centrada principal, aunque no exclusivamente, en el plano político-ideológico. Podemos señalar, sin pretensión de exhaustividad, tres ejes: institucionalidad, Estado vs. mercado y la posibilidad

¹¹ Véase, por ejemplo, ACDE (19 de diciembre de 2014).

del cambio cultural que dieron lugar a una importante controversia entre intelectuales y organizaciones políticas acerca de la capacidad hegemónica de Cambiemos (Natanson, 2018; Rinesi, 2018).

Luego de la derrota electoral de la alianza Cambiemos, nos quedan sin duda una serie de discusiones abiertas sobre este punto. La apuesta de campaña de Mauricio Macri desde la amplia derrota de las PASO a manos del Frente de Todos (diseñado e impulsado por Cristina Fernández) y las elecciones generales, mostró una clara intencionalidad de hacer un giro más claramente ideológico, basado en identidades tradicionales del proyecto oligárquico argentino y menos en la idea de una nueva derecha, innovadora y dinámica. Esta estrategia de polarización político-electoral le dio sus frutos, puesto que la diferencia entre ambos contendientes se redujo de manera significativa. Este escenario nos conduce a un conjunto de preguntas para seguir profundizando: ¿cuán significativo ha sido el peso de la economía en la explicación de la derrota electoral del nuevo proyecto neoliberal? ¿Cuánto apoyo perdió entre las clases dominantes y entre las clases subalternas el proyecto de Cambiemos debido a la aceleración de la crisis económica? ¿Cuán volátiles son las alianzas políticas que permiten estabilizar un proyecto económico político en nuestro país? ¿Cuáles son los ejes sobre los que un sentido común neoliberal ha acumulado fuerzas entre las clases trabajadoras?

Son interrogantes que no podemos responder aquí, pero que consideramos de cierta importancia para realizar un balance de estos años y del nuevo intento de estabilización del neoliberalismo en nuestro país.

Referencias bibliográficas

Adamovsky, E. (2016). *El cambio y la impostura. La derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO*. Buenos Aires: Planeta.

- ACDE. (19 de diciembre de 2014). La independencia del poder judicial y de la prensa libre reafirma la democracia republicana. Recuperado de <https://acde.org.ar/la-independencia-del-poder-judicial-y-de-la-prensa-libre-reafirma-la-democracia-republicana/>
- Arbia, C. (11 de octubre de 2017). 53° Coloquio de Idea: Las 5 transformaciones que plante el empresariado joven. *Infobae*. Recuperado de <https://www.infobae.com/economia/2017/10/11/53-coloquio-de-idea-las-5-transformaciones-que-plantea-el-empresariado-joven/>
- Cayón, D. (20 de abril de 2017). Entre autocríticas y la pesada herencia, empresarios piden acelerar la infraestructura. *El Cronista*. Economía y Política. Recuperado de <https://www.cronista.com/economia-politica/Entre-autocriticas-y-la-pesada-herencia-empresarios-piden-acelerar-la-infraestructura-20170420-0060.html>
- Donato, N. (24 de julio de 2017). Reforma laboral: empresarios piden consenso y cambios en cargas sociales. *El Cronista*. Economía y Política. Recuperado de <https://www.cronista.com/economiapolitica/Reforma-laboral-empresarios-piden-consenso-y-cambios-en-cargas-sociales-20170724-0056.html>
- Donato, N. (14 de agosto de 2017). Empresarios festejan apoyo a Cambiemos y reclaman profundizar las reformas. *El Cronista*. Recuperado de <https://www.cronista.com/elecciones2017/Empresarios-festejan-apoyo-a-Cambiemos-y-reclaman-profundizar-las-reformas-20170814-0041.html>
- Duménil, G. y Lévy, D. (2015). *La gran bifurcación. Acabar con el neoliberalismo*. Buenos Aires: Capital intelectual.
- Franco, L. (9 de abril de 2017). Jaime Campos: Los empresarios debemos hablar más fuerte. *Ámbito.com*. Economía. Recuperado de <https://www.ambito.com/economia/jaime-campos-los-empresarios-debimos-hablar-mas-fuerte-n3978803>
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.

- Krippner, G. (2005). The Financialization of the American economy. *Socio-economic Review*, 3(2), 173-208. <https://doi.org/10.1093/SER/mwi008>
- López, E. (2015). *Los años postneoliberales. De la crisis a la consolidación de un modo de desarrollo*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- López, E. y Barrera Insua, F. (2018). La pesada herencia de la dependencia. Competencia capitalista y ganancias extraordinarias en Argentina (2002-2015). *América Latina Hoy*, 80, 119-141. <https://doi.org/10.14201/alh201880119141>
- Natanson, J. (2018). ¿Por qué? *La rápida agonía de la argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Reartes, L. y Pérez, P. (2018). Nuevo ciclo regresivo: Transformaciones del mercado de trabajo durante el macrismo. En P. Pérez y E. López (Coords.), *¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina?: Mundo del trabajo, conflictos laborales y crisis de hegemonía*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Estudios/Investigaciones ; 69). Recuperado de <https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/120>
- Rinesi, E. (2018). Sobre la naturaleza del marxismo. *Márgenes. Revista de economía política*, 4, 47-56. Recuperado de <https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/9772362193104-completo.pdf>
- Schorr, M. (2018). Una vez más en la disyuntiva: América del Sur entre las ventajas comparativas estáticas y la industrialización. *Tramas. Revista de política, sociedad y economía*, 5. Recuperado de <http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/articulo/una-vez-mas-en-la-disyuntiva-america-del-sur-entre-las-ventajas-comparativas-estaticas-y-la-industrializacion/>

Schorr, M., Cassini, L. y García Zanoti, G. (2019). El poder económico durante el gobierno de Cambiemos: desempeños empresarios y lógicas de acumulación en una etapa de reposicionamiento de las diferentes fracciones del capital concentrado. En P. Belloni y F. Cantamutto (Coords.), *La economía política de Cambiemos. Ensayos sobre un nuevo ciclo neoliberal en Argentina*. Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Watkins, S. (2019). Estados Unidos vs China. *New Left Review*, 115, 7-18. Recuperado de <https://newleftreview.es/issues/115/articles/estados-unidos-vs-china.pdf>

Cuáles son puntos claves del convenio petrolero por Vaca Muerta. (2 de febrero de 2017). *Ámbito.com*. Política. Recuperado de <https://www.ambito.com/politica/cuales-son-puntos-claves-del-convenio-petrolero-vaca-muerta-n3971546>

La AEA reclama bajar costos logísticos para mejorar la competitividad. (20 de abril de 2017). *El Cronista*. Economía y Política. Recuperado de <https://www.cronista.com/economiapolitica/La-AEA-reclaman-bajar-costos-logisticos-para-mejorar-la-competitividad-20170420-0034.html>

Las 12 frases más destacadas de Mauricio Macri en el Coloquio de IDEA. (13 de octubre de 2017). *Clarín*. Política. Recuperado de https://www.clarin.com/politica/12-frases-destacadas-mauricio-macri-coloquio-idea_0_SkNVBhC3W.html